

datos o circunstancias que permitieran la identificación de la persona que colocó los dispositivos anormales en los aparatos surtidores observados por la Inspección, manifestándose completo desconocimiento por el compareciente; y estimándose por la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos» que los hechos comprobados constituyen falta extremadamente grave propuso, de conformidad con lo informado por su Departamento Comercial y Asesoría Jurídica, la sanción de anulación de la concesión e incautación de las instalaciones y su reversión al Estado;

Resultando 4.º: Que la Sección de Ingenieros de la Delegación del Gobierno en C. A. M. P. S. A. informó corroborando las anomalías que se hicieron constar en el acta de la Inspección en que intervinieron y que no pueden estimarse desvirtuadas por las afirmaciones de la Sociedad expedientada ni por el reconocimiento hecho días después de los aparatos surtidores por funcionarios de la Delegación Provincial de Industria, por lo que se considera procedente la propuesta de C. A. M. P. S. A. y comunicación de los hechos a los Tribunales de Justicia, informando en el mismo sentido la Asesoría Jurídica de la Delegación del Gobierno en C. A. M. P. S. A., y, por último, fué prestada conformidad a dicha propuesta por la Delegación del Gobierno.

Considerando 1.º: Que las actuaciones se han practicado con observancia del procedimiento sancionador prescrito en el artículo 52 del vigente Reglamento para suministro y venta de carburantes y combustibles, aprobado por la Orden de 30 de julio de 1958, según redacción dada por las Ordenes de 31 de marzo de 1962 y 15 de marzo de 1968; correspondiendo al Ministro de Hacienda la imposición de sanción cuando consista en la anulación de la concesión;

Considerando 2.º: Que en el expediente tramitado y actas de Inspección inicial resulta probado el montaje en todos los surtidores de la Estación de Servicio expedientada, menos en uno, destinado a mezcla, de dispositivos que permitan que parte del carburante, aparentemente suministrado, al marcar volumen e importe en los aparatos de medición, fuera después devuelto al depósito subterráneo, causando con ello evidente lesión en el interés particular y público, por el indudable perjuicio económico para los consumidores y detrimento en el concepto y eficacia de un servicio en régimen de monopolio, acentuada la gravedad de la falta por la adopción de artillos ingenios mecánicos con la exclusiva finalidad de falsear las cantidades de carburante suministrado, lo que implica una intencionalidad dolosa y permanente, revestida de especial astucia que obliga a juzgar la falta con la máxima severidad, en cumplimiento de la obligación primaria de la Administración de proteger los derechos de los usuarios de servicios objeto de concesión y velar por la eficacia y buen funcionamiento de los mismos;

Considerando 3.º: Que la falta cometida se ha de calificar como muy grave, comprendida en el número 2.º, apartado C), del artículo 51 del citado Reglamento, que si bien se refiere a defecto en las medidas de los aparatos que superen la tolerancia máxima establecida por las normas que regulan las pesas y medidas—1 por 100, según norma cuarta del artículo 20 del Reglamento de 1 de febrero de 1952—, hallándose dichos aparatos desprecintados, ha de entenderse aplicable, no obstante no haberse quitado el precinto, ya que éste constituye una garantía de normal cautela en cuanto al defecto de medidas, pues sin violentarlo cabe que obedezca a defectuosidad no corregida del mecanismo medidor, en tanto que el desprecinto entraña acción violenta y decidida para provocar libre defraudación; circunstancia ésta que, sin embargo, concurre en el presente caso, al eludir el desprecinto con el montaje de ingeniosos artefactos que permiten llevar a cabo el mismo engaño, sin fácil descubrimiento, destacando así mayor peligrosidad en el agente y para los intereses de los consumidores;

Considerando 4.º: Que la falta cometida, por la máxima gravedad que reviste, el perjuicio que origina y la conducta que revela, debe ser sancionada con el mayor rigor, imponiendo la anulación de la concesión e incautación por C. A. M. P. S. A. de las instalaciones, según prevé el artículo 52 del Reglamento citado, dándose a la sanción la publicidad que autoriza dicho artículo y sin perjuicio de la responsabilidad que en el orden penal puedan apreciar en los hechos descubiertos los Tribunales de Justicia, a los que se habrá de dar conocimiento,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», y elevada por la Delegación del Gobierno en la misma, acuerda imponer a la «Estación de Servicio Castilla, S. L.», la anulación de la concesión e incautación inmediata por C. A. M. P. S. A. de las instalaciones, con reversión a favor del Estado, en la forma que previene el artículo 52, en relación con el 34, del repetido Reglamento, debiendo hacerse pública la sanción por la Delegación del Gobierno y darse conocimiento de los hechos a los Tribunales de Justicia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de febrero de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en C. A. M. P. S. A.

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la que se amplía la autorización número 1, concedida al «Banco de Bilbao», para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos a los establecimientos que se indican.

Visto el escrito formulado por el «Banco de Bilbao» solicitando autorización para ampliar el servicio de cuentas restringidas de recaudación de tributos.

Esta Dirección General acuerda disponer que la autorización número 1, concedida en 30 de septiembre de 1964, se considere ampliada a los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Valencia

Albalat de la Ribera.—Sucursal. Peris Mencheta, 27. a la que se asigna el número de identificación 46-1-11.

Demarcación de Hacienda de Alicante

Bañeres.—Sucursal. Fray Leonardo, 2. a la que se asigna el número de identificación 04-1-11.

Benisa.—Sucursal. Calle del Caudillo, 81. a la que se asigna el número de identificación 04-1-12.

Demarcación de Hacienda de Albacete

Casas Ibáñez.—Sucursal. Paseo General Ochoa, 8, a la que se asigna el número de identificación 03-1-02.

Demarcación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife

La Victoria de Acentejo.—Sucursal. Carretera general «Tanque de Animas», a la que se asigna el número de identificación 38-1-12.

Madrid, 17 de enero de 1969.—El Director general, José Ramón Benavides.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Algeciras por la que se hace público el acuerdo que se cita.

El ilustrísimo señor Presidente de este Tribunal, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 55 y 78 de la vigente Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente número 408/68 el siguiente acuerdo:

- 1.º Declarar cometida una infracción de contrabando de mínima cuantía comprendida en el caso primero del artículo 13 de la Ley citada.
- 2.º Declarar responsable en concepto de autor a Mustapha Bo Mohamed.
- 3.º Imponer la siguiente multa: 825 pesetas.
- 4.º En caso de insolvencia se impondrá la pena de privación de libertad de ocho días.
- 5.º Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.
- 6.º Declarar haber lugar a la concesión de premios a los aprehensores.

Requerimiento.—Se requiere al inculpaado para que, bajo su responsabilidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 de la misma Ley, manifieste si tiene o no bienes para hacer efectiva la multa impuesta, y si lo posee deberá hacerlo constar los que fuesen y su valor aproximado, enviando a la Secretaría de este Tribunal, en el término de tres días, una relación descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle para llevar a cabo su embargo. Si no los posee, o poseyéndolos no cumplimenta lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de libertad a razón de un día por cada 84 pesetas de multa, con el límite máximo de un año.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» para conocimiento del interesado.

Algeciras, 25 de enero de 1969.—El Secretario.—V.º B.º: El Presidente.—560-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Barcelona por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el actual domicilio de los súbditos italianos Michele Minacori y del llamado Gino y posiblemente conocido por Carmelo o Cornelio, por la presente se les notifica que el Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Central, en sesión de 17 de diciembre de 1968, fallando sobre el fondo del recurso número 37/68, promovido contra fallo dictado con fecha 8 de enero de 1968 por el Pleno de este Tribunal Provincial de Contrabando en su expediente 795/67, acordó desestimar el recurso interpuesto, revocando, no obstante, el fallo recurrido, en el sentido de imponer, entre otras multas, las siguientes:

A Michele Minacori y al llamado Gmo. 536.801.68 pesetas a cada uno de ellos, confirmando los demás pronunciamientos del fallo; contra cuyo fallo podrán interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia y cuyas multas deberán ingresar, precisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el plazo reglamentario.

Barcelona, 27 de enero de 1969.—El Secretario.—V. B.º: El Presidente.—558-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita

Desconociéndose el actual paradero de Leopoldo Rojas Alvarez y representante legal de «Automóviles Guirala», cuyos domicilios eran: el primero, desconocido, y el segundo, en avenida de Roma, número 37, de Barcelona, se les hace saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, y en sesión del día 16 de noviembre de 1968, al conocer el expediente número 55/67, acordó el siguiente fallo:

- 1.º Declarar cometida infracción de contrabando de mayor cuantía, comprendida en el número 1 del artículo 13 de la Ley de Contrabando, en relación con la aprehensión de un automóvil «Mercedes-Benz», valorado en 350.000 pesetas.
- 2.º Declarar responsables de la expresada infracción en concepto de autores a Luis Guiral Guarga y Leopoldo Rojas Alvarez.
- 3.º Declarar que en los responsables concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad siguientes: agravante octava del artículo 18 por reincidencia en la comisión de hechos análogos, aplicable únicamente al señor Guiral Guarga.
- 4.º Imponer las multas siguientes:

	Base	Tipo	Sanción	Sus. comiso
Luis Guiral Guarga	175.000	534 %	934.500	175.000
Leopoldo Rojas Alvarez ...	175.000	467 %	817.250	175.000
Totales	350.000		1.751.750	350.000

5.º Absolver de toda responsabilidad en materia propia de esta Jurisdicción a los demás encartados en el expediente, a la vista de su actuación en los hechos probados ante el Tribunal devolviendo el automóvil aprehendido a don Martín Blázquez García, actual propietario del mismo, y comprador de buena fe. Dicha devolución se efectuará una vez que adquiriera firmeza el presente fallo.

6.º Exigir en sustitución del comiso del automóvil su valor cifrado en 350.000 pesetas, a ingresar cada inculcado según se indica en el pronunciamiento cuarto.

7.º Declarar hay lugar a la concesión de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, precisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el plazo de quince días, a contar de la fecha en que se publique la presente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando en el plazo de quince días, a partir de la publicación de esta notificación, significando que la interposición del recurso no suspende la ejecución del fallo y que en caso de insolvencia se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de libertad a razón de un día de prisión por cada 96 pesetas de multa no satisfechas y dentro de los límites de duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 del Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 19 de noviembre de 1968.—El Secretario.—V.º B.º: El Delegado de Hacienda, Presidente.—622-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Domingo Robles López y Anibal Javier Bautista Torres, que tuvieron sus últimos domicilios conocidos en: Tetuán, calle de Antonio Maura, número 6, el primero, y en Madrid, calle de Joaquín María López, número 23, el segundo, se les hace saber por medio del presente edicto lo siguiente:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su sesión de Comisión Permanente de fecha 3 de diciembre de 1968, al conocer del expediente de este Tribunal número 368/66, instruido por aprehensión del automóvil matrícula M-387.709, ha acordado dictar el siguiente fallo:

«La Sala Tercera de Contrabando del Tribunal Económico-Administrativo Central, fallando sobre el fondo de los recursos de apelación interpuestos por don Luis Guiral Guarga y don Salvador Martín Moreno contra el fallo dictado en 14 de febrero de 1968 por la Comisión Permanente del Tribunal Provincial de Contrabando de Madrid en su expediente número 368/66, acuerda: Desestimar los recursos interpuestos y confirmar el fallo recurrido.»

Asimismo se les comunica que contra el expresado fallo pueden recurrir en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente comunicación, significando que dicho recurso no suspende la ejecución de los pronunciamientos dictados en este fallo (caso primero del artículo 85 de la Ley).

Madrid, 27 de enero de 1969.—El Secretario del Tribunal, 550-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Anibal Javier Bautista Torres, cuyo último domicilio conocido era en Joaquín María López, número 23, de Madrid, por medio del presente edicto se le hace saber lo siguiente:

El Tribunal Económico Administrativo Central en su sesión de Comisión Permanente del día 3 de diciembre de 1968, al conocer del expediente de este Tribunal número 368/66, instruido por aprehensión de un automóvil ha acordado dictar el siguiente fallo:

«La Sala Tercera de Contrabando del Tribunal Económico-administrativo Central, fallando sobre el fondo de los recursos de apelación interpuestos por don Luis Guiral Guarga y don Salvador Martín Moreno, contra el fallo dictado en 14 de febrero de 1968 por la Comisión Permanente del Tribunal Provincial de Contrabando de Madrid, en su expediente número 368/66, acuerda: Desestimar los recursos interpuestos y confirmar el fallo recurrido.»

Asimismo se le comunica que contra el expresado fallo puede recurrir en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente comunicación, significando que dicho recurso no suspende la ejecución de los pronunciamientos dictados en este fallo (caso primero, artículo 85, y caso primero, artículo 102 de la Ley).

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Procedimiento Económico-administrativo de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 27 de enero de 1969.—El Secretario del Tribunal.—554-E

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Antonio Pérez Fernández, Cornelio Aldosa Casanovas y José Ramírez Garrote, cuyos últimos domicilios fueron, respectivamente, Martínez Maldonado, número 24, de Málaga; Andorra, y Virgen del Pilar, número 26, de Madrid, se les hace saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en pleno y en sesión del día 24 de enero de 1969, al conocer del expediente número 100/67, acordó el siguiente fallo:

1.º Declarar cometidas dos infracciones de contrabando de mayor cuantía, ambas comprendidas en el número 1 del artículo 13 de la vigente Ley de Contrabando, en relación con la importación ilegal de un automóvil en cada una de ellas «Mercedes-Benz», valorados, respectivamente, en 300.000 pesetas y 350.000 pesetas.

2.º Declarar responsables de la primera infracción, en concepto de autores a Luis Guiral Guarga, Ramón Juncosa Vallbona, Antonio Onses Wauwil, y como cómplice a Antonio Pérez Fernández, y responsables de la segunda, en concepto de autores, a Luis Guiral Guarga, Ramón Juncosa Vallbona, Roberte Nahon Calle y José Ramírez Garrote, y como cómplices a Antonio Pérez Fernández. Siendo responsable subsidiaria en esta última infracción Roberte Nahon y su esposo, José Jorge Nahon.

3.º Declarar que en ambas infracciones es de estimar la circunstancia modificativa de la responsabilidad, agravante octava del artículo 18, por reincidencia en la comisión de hechos análogos, únicamente al inculcado Guiral Guarga.

4. Imponer como sanciones por dichas infracciones las multas siguientes: